

EDITORIAL

Algún día, el sector público

La competencia ha forzado varias reducciones de los pasajes aéreos. En general, es una buena noticia para el país. En cuanto los uruguayos viajan con frecuencia, significa una mejora de su ingreso real, y una ventaja para la balanza de pagos.

En la medida en que algún turismo llega de América del Norte y de Europa, es una buena noticia para la hotelería y el resto del sector especializado en vender servicios a los visitantes, y una vez más, por este otro concepto, favorable a la balanza de pagos. Solo ha sido una mala noticia, esa rebaja de pasajes, para PLUNA, cuyas autoridades han creído oportuno dar rienda suelta a su displacer por tal acontecimiento, claramente favorable a los intereses de la República en conjunto, y poner en movimiento los mecanismos que han estado a su alcance para frustrarlo.

En un país normal, esa confesión de la vocación monopolista del ente estatal por la expropiación mayor posible del consumidor, habría enfrentado el repudio generalizado que merece. En el Uruguay, quebrada la moral de su población por el ejercicio inveterado y omnipresente de la exacción estatal, las protestas del expropiador, y sus gestiones para mantener sus privilegios, han sido recibidas con general indiferencia.

Alguna utilidad deberíamos poder extraer, a pesar de todo, de semejante exabrupto.

Que él nos sirva, al menos, para recordar el inmenso peso que el sector público representa sobre los agobiados hombros de la nación.

Los lectores deben recordar que PLUNA vuela a Europa semanalmente con aparatos Boeing 707, totalmente obsoletos para ese fin, al punto que ninguna línea aérea medianamente prestigiosa los dedica a ese empleo. Usted no sabe cuánto pierde PLUNA por viaje, ni nosotros podemos decírselo, porque el ente oculta información. Pero tendríamos derecho a saberlo, porque todos pagamos los impuestos requeridos para solventar su déficit.

Claro que éste no es tan grande como el de AFE, AFE tiene más de 9.000 empleados, y su volumen de cargas y pasajes es insignificante. Sin contar con los sueldos del personal, AFE pierde mucho dinero. En realidad, viene a ser un gigantesco sistema de seguro de paro que funciona a gas oil, el único en el mundo, el más dispendioso del mundo.

Hay dos clases de subsidios que el contribuyente

uruguayo paga para tener el dudoso honor de ser propietario de un grande y notablemente ineficiente conglomerado industrial, que ni siquiera le brinda la información que ninguna empresa del mundo puede negarle a sus accionistas, la de un balance auditado e inteligible. Una de esas clases de subsidios son los explícitos, que paga mensualmente la Tesorería, con cargo a rentas generales, tales como los que reciben PLUNA y AFE. Luego están los subsidios implícitos en el poder monopolístico de los entes.

Tome usted el caso del alcohol en ANCAP. No solo tiene el ente el monopolio de la fabricación. Detenta asimismo el de la importación. En el Uruguay hay aranceles, y muy altos. ¿Por qué no se grava la importación de alcohol con el arancel máximo, y se deja importar al que esté dispuesto a pagarlo? Por una sencilla razón, porque el alcohol importado sería mucho más barato que el fabricado por ANCAP. ¿Por qué no se aplica el doble del arancel máximo? Pues, por lo mismo, porque el alcohol seguiría siendo demasiado barato. ¿Por qué no se fija simplemente el arancel necesario para detener la importación? Por supuesto que el lector no necesita que nosotros se lo aclaremos: porque ello revelaría la enormidad de la exacción que el monopolio impone a los consumidores.

Y, ¿qué decir del monopolio petrolero? ¿Cuánto le cuesta al país refinar crudo en una refinería obsoleta, y de tamaño antieconómico, frente a la alternativa de importar productos refinados? ¿Cuánto va a costarle la inversión, que a la sazón debe ser impostergable, para poner la refinería a salvo de un colapso físico y económico?

Búsqueda sostiene una notoria posición antiestatista, o liberal, o como quiera llamársele, que le conduciría a recomendar en cualquier caso la privatización de todo el conglomerado empresario de marras. Pero este editorial no es sobre eso. Nosotros no tenemos muchas esperanzas de que nuestra filosofía sea recibida en un futuro cercano por algún gobierno de este país. Ello no nos disuade de insistir, porque nuestra estrategia es, y siempre fue, y confiamos en que siempre será, de largo plazo. Pero ahora estamos hablando de un asunto urgente, apremiante. No se trata de dismantelar el imperio industrial del Estado, como nosotros queríamos. Se trata de darle una mirada en conjunto desde el punto de vista de

la eficiencia, con el fin, simplemente, de poner coto a los despilfarros de recursos de más grueso calibre en que allí se incurre.

Aparte de ser urgente, no sabemos cómo asegurar a nuestros lectores que se trata de un asunto que trasciende de manera clarísima la ideología. Nos quedaríamos encantados con que la revisión que pedimos, con los ojos puestos en la preservación de la eficiencia más elemental, la hiciera cualquier socialista inteligente, venido de un país donde los socialistas comprendan que sin eficiencia el pueblo vive necesariamente mal. Cualquier colaborador de Felipe González, o de Bettino Craxi, o de Laurent Fabius, nos vendría perfectamente bien.

Como lo hemos dicho numerosas veces: empresas estatales hay en todo el mundo. A nosotros no nos gustan, por motivos económicos, y más aún por motivos políticos. Pero que las hay, las hay, sin discusión. Pero, igualmente sin discusión, en ningún país fuera del Uruguay hay entes autónomos. Es decir: empresas que se gobiernan por metas abiertamente burocráticas (es decir, no hay en ellas sólo una propensión a la burocracia, inevitable cuando el Estado es Propietario; hay una vocación por la burocracia, una carta de ciudadanía de la burocracia en su gobierno) empresas cuya dirección se confía a políticos (o a militares, según el caso) que suelen carecer de toda experiencia en materia de dirección de empresas; que se intenta gobernar colegialmente, lo que sería imposible, aunque los directores fueran expertos en la materia; que no pueden remunerar decentemente a sus gerentes, porque están atados a restricciones absurdas en la materia, y por lo tanto, por regla general, no pueden contar con ejecutivos medianamente competentes; empresas donde nadie tiene el más mínimo incentivo para promover la eficiencia, porque los monopolios ocultan sus dispendios, porque nadie tiene interés en corregirlos más allá del que podría derivarse del patriotismo heroico, que ni siquiera publican balances que pudieran servir para evaluar sus gestiones; que, en una palabra, son paradigmas de despilfarro que, muy probablemente, le cuestan al país más que todo el servicio de la deuda externa.

Algún día, no lejano, el país va a tener que enfrentarse a esta cuestión. Por más que todos los mitos y todos los intereses creados están en contra. Será cuando la crisis se ponga lo suficientemente grave.